

Ola de violencia en el Gran Buenos Aires:

Crisis de seguridad en la provincia desata disputa entre Milei y gobernador Kicillof

El aumento de la criminalidad en el territorio más poblado de Argentina encendió la chispa entre el funcionario kirchnerista y el Presidente.

DANIEL MORENO CANGINO

El aumento de robos, enfrentamientos armados y asesinatos ha sido la tónica en los primeros meses del año de la provincia de Buenos Aires, una crisis de seguridad que encendió la polémica entre el gobierno del Presidente de Argentina, Javier Milei, y el gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof.

“Tiene la provincia que es un baño de sangre, en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la nación”, dijo Milei recientemente sobre Kicillof, a quien además trató de “mentiroso e inútil” por su gestión de la crisis que agrava al territorio más poblado del país, con 17,5 millones de habitantes.

Sus declaraciones se dieron después de que Kicillof reclamara en sus redes sociales un “abandono” del gobierno nacional, al que acusó de no hacerle llegar 750.000 millones de pesos (unos 710 millones de dólares) para financiar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. El gobernador también incriminó al mandatario por “hacer marketing con el dolor y la tragedia” con la ola de crímenes.

Delitos se mantienen altos en la provincia

Argentina, al tener un sistema



KICILLOF RECLAMA un “abandono” del gobierno, al que acusó de no entregar fondos para enfrentar la inseguridad.

federal, se constituye por una capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y provincias (entre las que se encuentra la de Buenos Aires y que aglomera a todas las localidades adyacentes a la ciudad), las que cuentan con una amplia autonomía y con sus propias policías y órganos judiciales.

“La responsabilidad de esta crisis es enteramente del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dice José Di Mauro, analista político argentino.

A nivel nacional, las cifras de delitos han bajado. La tasa de homicidios descendió desde los 4,4 asesinatos cada 100 mil habitantes a 3,8, pero en la provincia bo-

naerense sigue por sobre la media, en un 4,47. A esto se suma que en el área metropolitana de la ciudad (cuya mayoría se encuentra bajo jurisdicción de la provincia) se denunciaron 544 robos al día en 2024, un 20% más que el año anterior.

Pero la crisis terminó de explotar con los recientes asesinatos de dos adolescentes en la localidad de Florencio Varela, y de un repartidor en Moreno al intentar defender a un vendedor ambulante de un robo (ambos dentro de la provincia).

Jorge Vidal, especialista argentino en seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, su-

giere que la raíz de la crisis radica en la proliferación de las drogas y que “el sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, junto al de justicia, está quebrado por las malas administraciones que hubo a través de los años”.

Rosario, caso exitoso de ayuda federal

A pesar de que las competencias de seguridad son por ley responsabilidad del gobierno provincial, la politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Belén Amadeo, dice que “muchas veces, cuando las provincias no dan

abasto, piden ayuda al Ministerio de Seguridad Nacional”.

Eso ocurrió en la provincia de Santa Fe, cuya ciudad más poblada, Rosario, fue considerada la “capital narco” de Argentina, por lo que el gobierno local pidió ayuda al ministerio liderado por Patricia Bullrich y este respondió con el “Plan Bandera”, que comprendió el envío de policías federales, entre otras medidas que lograron reducir los 398 homicidios de 2023 a 176 en 2024, una caída del 56%.

Sin embargo, esta ayuda es difícil que se replique en Buenos Aires. Sobre esta posibilidad, Milei ha señalado que “el problema es que si él (Kicillof) no quiere que lo ayude, el problema es que él es parte del problema, no de la solución”.

¿Estrategias electorales?

Esta semana, las autoridades provinciales publicaron datos que muestran una baja en diversos delitos del pasado mes respecto de enero de 2024. Según el informe, los homicidios bajaron de 94 a 87 (un 7,45%), los asaltos de 2.792 a 2.625 (6%) y los hurtos de 7.205 a 5.326 (26,1%).

El analista Di Mauro cuestiona estas cifras, ya que “vienen de parte de un sector político no muy apegado a los datos concretos”, en referencia a la falta de difusión de los datos de pobreza cuando Kicillof fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que este justificó en su momento por ser “una medida estigmatizante”.

Considerando las elecciones legislativas de octubre próximo, tanto Milei como Kicillof buscan “no quedar manchados” por la crisis bonaerense, de acuerdo con Amadeo.

La politóloga plantea que Axel Kicillof “está bastante solo en términos políticos” debido a un “problema de legitimidad o de falta de apoyo por parte de Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner”, por su distanciamiento tras disputas internas del partido de la exmandataria, Unión por la Patria. Por esto, su principal preocupación sería “lograr que quienes votaban a Cristina voten a su gente en estas elecciones”.

Por su parte, el mandatario ha logrado de la mano de su “moto-sierra” bajar la inflación, algo que según la analista le “ha dado paz a la gente” y que le permite tener “un margen de maniobra bastante interesante” a la hora de atacar a sus rivales e impulsar iniciativas en el Congreso como la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), con la que busca “reducir el costo de la política”.

¿Y la solución?

Sobre la violencia en el Conurbano, autoridades como Ariel Sujarchuk, intendente de la localidad bonaerense de Escobar, defienden una mayor cooperación entre las fuerzas federales, provinciales y municipales. “Hay que dejar de jugar al gran bonete (modismo equivalente a *pasarse la pelota*) en materia de seguridad”, afirmó el funcionario, en un acto la semana pasada en la Universidad de Buenos Aires.

En contraste, según Vidal, la inseguridad no se aplacará mientras no se “refunde” a la policía provincial, a cuyos funcionarios se les subirá el sueldo en un 9% para marzo y a la que este considera “inoperante”. “Se necesitarían 4 años para dar los primeros pasos firmes y otros 4 años más para consolidar el cambio”, sostiene el experto en seguridad.